La afectación multisectorial del *brex*it: ¿cuáles son las consecuencias jurídicas?

Ana I. Mendoza Losana y Jesús Almarcha Jaime

Departamento de Gestión del Conocimiento de Gómez-Acebo & Pombo

Este trabajo tiene como fin exponer sintéticamente algunas de las principales consecuencias jurídicas que el denominado brexit (salida del Reino Unido de la Unión Europea) implicaría para la Unión Europea y el Reino Unido. A tales efectos, se parte de la concepción de que el Reino Unido no formaría parte del Espacio Económico Europeo y sí de la Organización Mundial del Comercio, puesto que es probable que el país británico no esté interesado en un régimen de pérdida de soberanía en la toma de decisiones, como en los casos de Noruega y Suiza.

1. Entidades financieras

1.1. Aspectos comunes

– «Pasaporte comunitario»

El *brex*it conllevaría que las entidades financieras con domicilio social en el Reino Unido pasarían a someterse al régimen y a las restricciones previstos para terceros países ajenos a la Unión Europea. Del mismo modo, las entidades con domicilio social en Europa tendrían más trabas legales para el ejercicio de la actividad en el Reino Unido. En consecuencia, las empresas británicas y sus filiales en la Unión Europea deberán relocalizarse para conservar este privilegio.

– Supervisión y solvencia

También existirán problemas en la determinación del marco de supervisión y solvencia de las entidades por cuanto el *brex*it implicaría que el Reino Unido quedaría fuera, por ejemplo, de

la regulación establecida por la directiva «Solvencia II» y el reglamento «Basilea III».

– Venta de deuda

Algunas entidades pueden ofrecer bonos o participaciones en el mercado regulado comunitario para obtener financiación en unas condiciones y con unas exigencias compartidas entre los Estados miembros. Así, el folleto de emisión puede utilizarse en todos los mercados en un régimen equivalente que no puede agravarse con nuevas exigencias por parte de tales Estados. El *brex*it podría conllevar divergencias entre la normativa europea y la británica en este sentido.

1.2. Seguros y reaseguros

– Imposibilidad de supervisión directa

Solvencia II prevé la posibilidad de que la autoridad de supervisión del Estado miembro de origen pueda supervisar

N. de la C.: En las citas literales se ha rectificado en lo posible —sin afectar al sentido— la grafía de ciertos elementos (acentos, mayúsculas, símbolos, abreviaturas, cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto.

in situ la sucursal de la entidad aseguradora situada en otro Estado miembro. Ello no es posible con las entidades de terceros países.

– *Imposibilidad del inicio automático de la actividad*

Las entidades reaseguradoras domiciliadas en el Reino Unido se someterían al régimen previsto para entidades de terceros países, de modo que ya no podrían favorecerse del comienzo automático de la actividad con la mera comunicación entre las autoridades de supervisión de los Estados miembros. De hecho, tanto para las aseguradoras como para las reaseguradoras el silencio administrativo supone la desestimación de la solicitud.

– *Imposibilidad de operaciones de seguro directo*

No se podrían concertar en España operaciones de seguro directo con entidades aseguradoras británicas o hacerlo a través de mediadores, salvo por medio de una sucursal legalmente establecida.

– *Coaseguro comunitario*

No está claro si el *brexit* implicaría la imposibilidad de que las entidades aseguradoras domiciliadas en el Reino Unido formaran parte en un coaseguro comunitario. La naturaleza de la institución no evidencia la necesidad de que las coaseguradoras pertenezcan a Estados miembros. Por ello, entendemos que más bien puede pensarse que el término *comunitario* hace referencia a la situación del riesgo en territorio europeo. Es más, una entidad británica con una sucursal en un Estado miembro podría formar parte de un coaseguro comunitario. Con todo, el dilema es manifiesto, principalmente si tenemos en cuenta la anterior redacción del artículo 33a de la Ley de Contrato de Seguro.

– *Distribución de seguros*

Las personas físicas o jurídicas que quieran ejercer la distribución de seguros podrán someterse a un régimen distinto en función de si actúan dentro o fuera de la Unión Europea. Así, cuando los riesgos o compromisos estén en el Reino Unido o cuando el distribuidor ejerza la actividad en dicho Estado, no será aplicable la directiva de distribución de seguros. Ello puede implicar, por ejemplo, una relajación de la información precontractual para el tomador en el Reino Unido.

1.3. Banca

– *Servicios de pago*

La nueva Directiva (UE) 2015/2366, de servicios de pago, no sería aplicable a los servicios de pago efectuados en el Reino Unido. Uno de los principales puntos sería la actuación llevada a cabo por las *fintech* en adelante, pues muchas de ellas están asentadas en Londres.

– *Directivas MiFID*

Existen algunas diferencias significativas entre la MiFID I y la MiFID II en relación con el tratamiento de entidades de terceros países, que es lo que pasaría a ser el Reino Unido. Por ejemplo, la MiFID II establecerá dos regímenes diferentes, teniendo distintas disposiciones para los clientes minoristas y los clientes profesionales. En la mayoría de los casos una entidad bancaria domiciliada en un tercer país sólo podrá llevar a cabo un negocio de inversión con un cliente minorista en un Estado miembro si el banco ha establecido una sucursal en dicho Estado miembro. Con el fin de establecer una sucursal, las autoridades del Estado miembro deberían cerciorarse de que el tercer país cumple las exigencias respecto a áreas clave

como el blanqueo de capitales y la lucha contra la financiación del terrorismo.

Seguramente el Reino Unido busque la equivalencia normativa entre este Estado y la Unión Europea, aunque existen algunos aspectos que podrían ser revisados teniendo en cuenta que, durante la tramitación de la directiva, el Reino Unido se opuso a ellos.

2. Derecho de la competencia

– *Prácticas antimonopolísticas*

Aunque las actuaciones adoptadas por las empresas británicas que tuvieran efecto sobre el territorio de la Unión Europea seguirían estando sometidas a las normas de competencia comunitarias, lo cierto es que la Comisión Europea no podría llevar a cabo investigación *in situ* en el Reino Unido ni pedir a las autoridades de supervisión nacional y comunitaria que llevaran a cabo la investigación en su nombre, limitándose a hacer solicitudes de información por escrito.

– *Control de fusiones*

Se rompería la cooperación entre la Comisión Europea y el Reino Unido, de modo que las nuevas fusiones pasarían a ser analizadas por ambas partes, lo cual supone que las empresas deban hacer frente a una mayor burocratización y más controles, mientras que la autoridad británica de competencia (UK Competition and Markets Authority) haría frente a un mayor número de casos.

– *Ayudas estatales*

El Reino Unido podría conceder ayudas estatales, dentro de los márgenes establecidos por la Organización Mundial del Comercio, sin que tuviera que soportar represalias por parte de los Estados europeos (y viceversa).

3. Protección de datos

– *¿Tercer país seguro?*

En el ámbito de la protección de datos, la Comisión Europea tendría que designar al

Reino Unido como un «tercer país seguro», so pena de que se apliquen exigencias más estrictas en las transferencias de datos, principalmente para las empresas que se encarguen del procesamiento de éstos.

– *Reglamento General de Protección de Datos*

No sería aplicable en territorio británico, al menos desde el 23 de junio del 2018¹. Asimismo, cualquier empresa británica que opere en la Unión Europea deberá seguir las directrices del reglamento incluso en caso de *brexit*. Lo más probable es que el Reino Unido acabe aprobando su propia ley con un contenido lo más compatible posible con la normativa europea en aras de un acuerdo de cooperación con la Comisión Europea.

4. Comercio electrónico

– *Salida del mercado único digital*

Las medidas adoptadas por la Unión Europea contra el bloqueo geográfico, la mejora de los servicios de paquetería transfronteriza y el reforzamiento de los derechos y la confianza de los consumidores no tendrían repercusión en el país británico.

– *Aumento de restricciones comerciales*

Es posible que se establezcan más restricciones al comercio electrónico entre el Reino Unido y la Unión Europea, como un incremento de los aranceles o de medidas de control transfronterizo. Ello, junto con la potencial debilitación de la libra, provocaría un empeoramiento económico para el Reino Unido, sus ciudadanos y sus empresas.

5. Aspectos procesales

– *Regulación*

No serían aplicables los reglamentos europeos sobre competencia judicial, reconocimiento de resoluciones judiciales y sobre Derecho aplicable.

– *Sumisión a la ley inglesa*

No se prevé una alteración sustancial de las consecuencias respecto a la competencia de

¹ Recuérdese que el reglamento será de aplicación desde el 25 de mayo del 2018.

los tribunales ingleses, aunque se aplicaría el Derecho inglés en lugar del Reglamento Bruselas I *bis*.

– *Reconocimiento y ejecución de sentencias*

Las sentencias inglesas no se beneficiarían del privilegio de ejecución transfronteriza automática (art. 36 del Reglamento Bruselas I *bis*). En consecuencia, se requerirá el procedimiento nacional de *exequatur* (si sólo se solicita el reconocimiento, puede ser incidental), incluso si el Reino Unido se adhiere al Convenio de Lugano.

– *Litispendencia y conexidad*

Las reglas del Reglamento Bruselas I *bis* son potestativas para los tribunales, por lo que no se garantiza que un juez de un Estado miembro vaya a suspender (o inhibirse de él) un procedimiento porque exista uno paralelo en el Reino Unido cuya resolución podría ser susceptible de ser reconocida. Sólo si se adhiere al Convenio de Lugano podrá aplicarse el principio de temporalidad.

– *Cláusulas material adverse change*

Para los contratos mercantiles y financieros sujetos a la ley inglesa es posible que se entienda que no existe un empeoramiento suficiente como para resolver el contrato, aunque sí es posible tal circunstancia en contratos con consumidores, principalmente si el legislador británico desmonta y empeora los derechos de este colectivo.

6. Audiovisual: salida del mercado único digital

– *Licencias y autorizaciones audiovisuales*

En tanto en cuanto el Reino Unido siga perteneciendo al Espacio Económico Europeo, los operadores audiovisuales establecidos en el Reino Unido podrán obtener licencias o autorizaciones para actuar como prestadores de servicios de comunicación audiovisual en otros Estados de la Unión Europea, que, como España, condicionan su obtención a la nacionalidad en España o en otro Estado perteneciente a dicho espacio económico. En caso de salida incluso de

este espacio, los prestadores de servicios de comunicación audiovisual británicos sólo podrían obtener licencias audiovisuales *en otros Estados conforme al principio de reciprocidad*.

– *Posibles restricciones a las retransmisiones emitidas desde el Reino Unido*

En el ámbito comunitario se garantiza la libertad de recepción y no obstaculización de las retransmisiones de los servicios de comunicación audiovisual procedentes de otros Estados miembros por motivos inherentes a los ámbitos coordinados por la Directiva 2010/13/UE, de 10 de marzo, de coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (art. 3). Fuera de ese ámbito, no hay obstáculos para restringir tales emisiones. El *brexit* permitiría a los Estados restringir las emisiones procedentes del Reino Unido por los motivos previstos en la directiva de comunicación audiovisual (protección de los menores o de los consumidores, seguridad pública...), pero también por motivos no previstos en dicha directiva (p. ej., bloqueo de publicidad de productos británicos).

– *El Reino Unido quedaría fuera del grupo de entidades reguladoras europeas (ERGA, The European Regulators Groups for Media Services)*

El ERGA estará compuesto por los veintiocho reguladores audiovisuales nacionales, cuyas funciones se refuerzan en la próxima revisión de la Directiva 2010/13/UE. Le corresponde, entre otras responsabilidades, evaluar los códigos de conducta a los que habrán de someterse los prestadores de servicios de comunicación audiovisual, incluidas las plataformas de distribución de vídeos *on line*, y asesorar a la Comisión.

7. Telecomunicaciones: salida del mercado único de comunicaciones electrónicas

– *Los operadores británicos sólo podrían explotar redes o prestar servicios de comunicaciones electrónicas en los Estados miembros*

de la Unión Europea en los términos previstos en los convenios internacionales

En España, como en otros Estados de la Unión Europea, sólo podrán explotar redes y prestar servicios de comunicaciones electrónicas a terceros las personas físicas o jurídicas nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o de otra nacionalidad cuando, en este segundo caso, así esté previsto en los acuerdos internacionales que vinculen al Estado en cuestión. No obstante, en ausencia de un convenio internacional al efecto, los respectivos Gobiernos podrán autorizar excepciones de carácter general o particular. Sin perjuicio de posibles acuerdos bilaterales, de acuerdos entre el Reino Unido con la propia Unión Europea o de autorizaciones particulares, el *brexít* dificultaría la expansión de los operadores británicos de telecomunicaciones.

- *Imposibilidad de beneficiarse de los principios de red abierta respecto a las redes de otros Estados de la Unión Europea*

Los operadores británicos se verían privados de los derechos de acceso e interconexión conforme a los principios de red abierta (objetividad, transparencia, proporcionalidad y no discriminación) y sólo tendrían derechos de interconexión en los términos reconocidos a los operadores de fuera de la Unión Europea.

- *Posible encarecimiento de los servicios de itinerancia para consumidores y operadores*

El *brexít* supondría la no aplicación del régimen del servicio de itinerancia comunitario. De verificarse, el Reino Unido dejaría de ser territorio comunitario a efectos de la aplicación del Reglamento 2015/2120/UE, de 25 de noviembre, que establece medidas en relación con el acceso a una internet abierta, y se modifica la Directiva 2002/22/CE, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, y el Reglamento (UE) núm. 531/2012, relativo a la itinerancia en las redes públicas de comunicaciones móviles en la Unión. Ello significaría que los británicos (empresas

o particulares) dejarían de beneficiarse de las eurotarifas al por menor de los servicios de itinerancia y del resto de las medidas de protección de los usuarios previstas en el citado reglamento comunitario (tarificación por segundos, límites máximos del volumen de datos utilizados en *roaming* u obligaciones informativas, entre otras).

Sin perjuicio del acuerdo de las partes, tampoco los operadores británicos que ofrezcan servicios de itinerancia a sus clientes podrían acogerse al régimen de tarifas al por mayor reguladas por el Reglamento (UE) 531/2012 cuando las redes visitadas pertenezcan a Estados miembros de la Unión Europea.

- *Exclusión del ORECE*

El Reino Unido quedaría fuera del Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas (ORECE) que ofrece asesoramiento a las instituciones europeas sobre la normativa relativa al mercado único de comunicaciones electrónicas.

8. Energía: salida del mercado único de la energía

Además de las posibles trabas que los Estados miembros pudieran imponer a las empresas británicas como empresas de terceros Estados para obtener las correspondientes licencias o autorizaciones para desplegar redes o prestar servicios en sectores estratégicos como el energético, el *brexít* tendría consecuencias específicas en este ámbito:

- *Exclusión del mercado interior de la energía*

El Reino Unido quedaría fuera del mercado interior de la energía, careciendo de aplicación las normas que regulan los intercambios mediante interconexiones interiores («acoplamiento único diario e intradiario») y que garantiza, en favor de los consumidores, que la energía fluya de las zonas de oferta hacia las de demanda y, a su vez, de las zonas de precios bajos a las zonas de precios altos [Reglamento (CE) núm. 714/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio del 2009, relativo a las condiciones

de acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad; Reglamento (UE) núm. 1227/2011, sobre integridad y transparencia del mercado mayorista de energía, y Reglamento núm. 2015/1222/UE, de 24 de julio, por el que se establece una directriz sobre la asignación de capacidad y la gestión de las congestiones].

- *Exclusión de la financiación comunitaria de infraestructuras energéticas de interés común*

En caso de abandonar la Unión, el Reino Unido no podría beneficiarse del Plan de la Comisión Europea de financiación de infraestructuras energéticas de interés común por contribuir a la consecución de la unión energética. Estas infraestructuras facilitan la integración de los mercados de la energía en Europa y la diversificación de las fuentes de energía y de las rutas de transporte. Conforme al Reglamento de la Unión Europea núm. 347/2013, la Comisión revisa cada dos años el listado de infraestructuras de interés general. El pasado 28 de noviembre, la Comisión aprobó una lista de proyectos calificados de interés común (PIC) que podrían optar a la ayuda financiera del Mecanismo «Conectar Europa» para 2014-2020. Entre estos proyectos figuran distintas infraestructuras de interconexión del Reino Unido con otros países de la Unión (la primera interconexión entre Bélgica y el Reino Unido o la ampliación de la capacidad de la interconexión del Reino Unido con Francia e Irlanda). La verificación del *brexit* obligaría

a la Comisión a rectificar esta calificación y, sin perjuicio de acuerdos bilaterales, privaría al Reino Unido de los beneficios de las interconexiones energéticas (seguridad del suministro, reducciones de precios y mayor integración de las energías renovables, entre otros).

Según las previsiones de la Comisión en su comunicación al Parlamento Europeo y al Consejo de 25 de febrero del 2015, COM (2015) 82 final, «Alcanzar el objetivo de interconexión de electricidad del 10 % – Preparación de la red eléctrica europea de 2020», gracias a los proyectos de interés común, que incluyen líneas internas y garantizan las interconexiones con Bélgica, Francia, Irlanda y Noruega, el Reino Unido alcanzaría el objetivo del 10 % para el 2020 y sus interconexiones estarían menos congestionadas. Obviamente, el *brexit* impediría la consecución de este objetivo y, con ello, el mercado británico quedaría más aislado, siendo más vulnerable, menos sostenible y menos competitivo.

- *Exclusión del sistema de interconexiones transfronterizas para lograr el mercado único de la energía*

El *brexit* implicaría que los intercambios de energía a través de interconexiones con el Reino Unido tendrían la consideración de «intercambios internacionales» o con terceros países, que en Estados comunitarios, como España, están sometidos a autorización administrativa.

Para cualquier duda, por favor póngase en contacto con:

Miguel Troncoso
Socio director, Bruselas
Tel.: 32 (0) 2 231 12 20
mtroncoso@gomezacebo-pombo.com

Miguel Lamo de Espinosa
Socio, Madrid/Londres
Tel.: (34) 91 582 91 00
mlamo@gomezacebo-pombo.com

Mónica Weimann
Socia residente, Londres
Tel.: 44 (0)20 7329 5407
mweimann@gomezacebo-pombo.com

Javier Vinuesa
Socio, Madrid
Tel.: (34) 91 582 91 00
jvinuesa@gomezacebo-pombo.com

Santiago Gómez-Acebo
Socio, Madrid
Tel.: (34) 91 582 91 00
sga@gomezacebo-pombo.com

Para más información consulte nuestra web www.gomezacebo-pombo.com, o diríjase al siguiente e-mail de contacto: brexit@gomezacebo-pombo.com

Barcelona | Bilbao | Madrid | Valencia | Vigo | Bruselas | Lisboa | Londres | Nueva York